

Autoritarismo y militares en el siglo XX argentino

Riccardo Forte
EL COLEGIO DE MÉXICO

INTRODUCCIÓN

Entre la segunda mitad de los años sesenta y la primera de los setenta, asistimos en América Latina, y en el cono sur americano con particular intensidad, a la instauración de un nuevo sistema de control político de la sociedad, el Estado burocrático-autoritario (BA), y al sucesivo esfuerzo para consolidarlo.

Este fenómeno fue precedido por la imposición de los militares como protagonistas en la escena política, y está estrechamente enlazado con ellos. Desde este periodo, las fuerzas armadas pudieron influir de manera sustancial sobre la conducta política y económica de los gobiernos, aun-

cuento no participaron directamente en la administración gubernamental.

El autoritarismo-burocrático (AB) se caracteriza por su notable extensión geográfica y por importantes diferencias en los diversos casos y, sobre todo, es consecuencia de situaciones estructurales no siempre homogéneas. Diversos niveles de modernización y de conflicto social, así como diversos niveles de industrialización, gobernabilidad, desarrollo económico y movilización popular, caracterizan las situaciones en las cuales se instauró esta nueva forma de dominación de la sociedad. Además, el AB puede manifestarse a través de sistemas más o menos represivos y violentos. Una consecuencia de esta heterogeneidad es la

frecuente falta de exhaustividad de los esquemas politológicos hasta ahora propuestos, para evidenciar las causas de este fenómeno político contemporáneo. Estos esquemas presentan un elevado nivel de generalización: por eso privilegian las variables comunes en los diversos casos, a menudo sin tomar en cuenta que en diferentes contextos las variables adquieren diferentes grados de relevancia, o atribuyen arbitrariamente valor de generalidad a factores que asumen importancia solamente en casos particulares. Además, los esquemas politológicos derivan del análisis de unidades temporales de corto plazo, y privilegian por tanto las causas inmediatas del fenómeno determinado. De esta manera, el análisis politológico corre el riesgo de considerar como fundamentales variables secundarias y puede omitir factores de largo plazo, los que en realidad son de importancia fundamental en casos específicos.

Este artículo, a partir del estudio del caso argentino, propone una interpretación histórica de las causas que han determinado el crecimiento progresivo del poder militar y la articulación final de este poder en el Estado BA. Mi tesis es que el AB argentino deriva de las contradicciones existentes por la presencia contemporánea de elementos inconciliables de cambio y continuidad que caracterizan la estructura social entre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Esta tesis se basa en la convicción de que la forma estatal BA no es la fase sucesiva de la caída de un sistema democrático, sino la última fase de un proceso de transformación autoritario, iniciado en los primeros años del siglo XX por las

clases dominantes. Variables como la "inflación", la "rápida y constante reducción de los salarios reales", el "déficit del sector público" y la "colosal deuda exterior" son, sin duda, importantes elementos que desencadenan el proceso de derrumbe del sistema político precedente. Sin embargo, estas variables no son suficientes para explicar el nacimiento y la consolidación de una forma estatal totalmente nueva y original, en comparación con los sistemas políticos autoritarios anteriores de Argentina o de otras experiencias históricas.

La concomitancia evidenciada en algunos estudios entre el nacimiento del AB y el elevado nivel de industrialización y modernización de la sociedad argentina, no son factores que expliquen la reciente recrudescencia de las relaciones clientelares en las regiones rurales, ni la tendencia de los programas económicos BA a favorecer la renta agraria en perjuicio de los sectores más dinámicos de la sociedad. Individualizar una burguesía en las clases dominantes de los años cincuenta y sesenta, significa no tomar en consideración los orígenes históricos de estas clases ni la persistencia, hasta hoy, de sus características originarias.

Asume una importancia fundamental la individuación o particularización de la función real desempeñada por la fuerzas armadas en el conjunto del contexto, como sector social determinante durante la mayor parte del siglo XX, en la formulación y articulación de los diferentes sistemas de dominación social de las clases subalternas; y además, la individuación de las vinculaciones existentes entre el creci-

miento del poder político de los militares y las contradicciones presentes dentro de la sociedad que vamos a examinar.

**TRANSFORMACIONES SOCIALES Y REFORMAS INSTITUCIONALES EN ARGENTINA
AL PRINCIPIO DEL SIGLO XX.
LA ARTICULACIÓN DEL ESTADO AUTORITARIO**

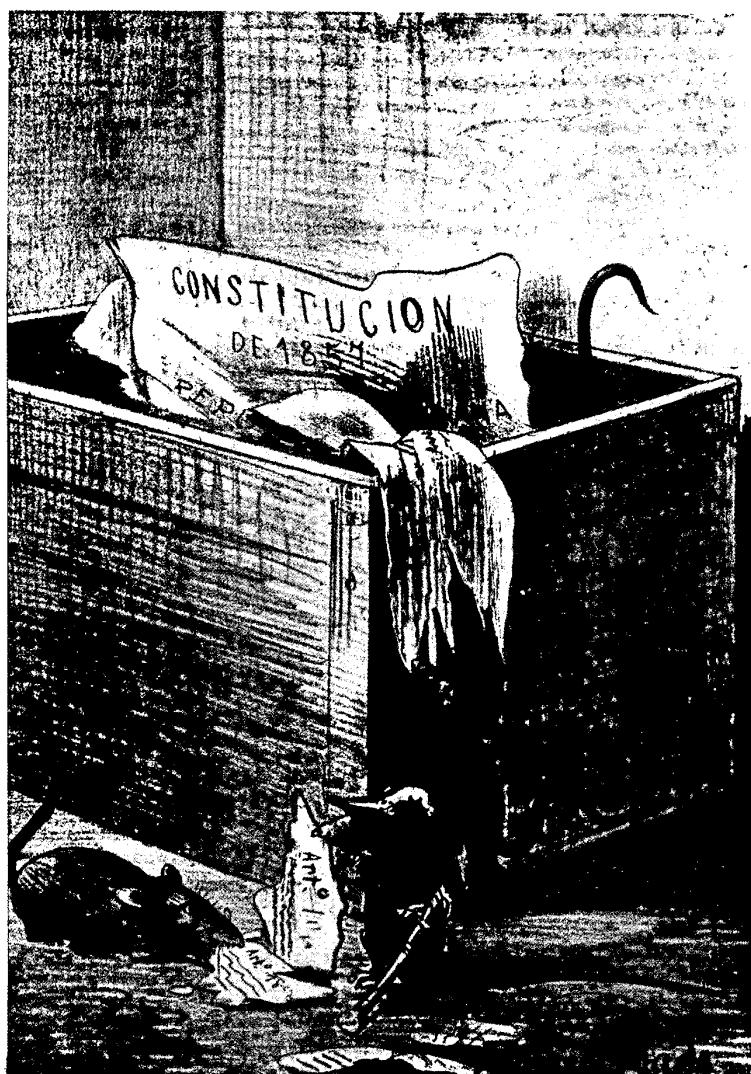
La reforma militar de 1901 y la ley electoral de 1912 representan el primer intento de las clases dominantes argentinas para adecuar el sistema de dominación social a los cambios estructurales ocurridos en la sociedad entre los siglos XIX y XX. Para comprender el significado real de estas reformas, es oportuno recordar que, desde la década de 1870, Argentina empezó la fase de inserción en el mercado internacional como país productor de bienes primarios, aprovechando el momento particularmente favorable, caracterizado por el crecimiento de la demanda europea de productos agropecuarios, consecuencia de una mayor especialización de Europa en la producción de diversos bienes manufacturados. El incremento en la demanda exterior determinó la necesidad de una cantidad de mano de obra que la población argentina no podía suministrar. Así, y como consecuencia, se introdujeron algunas leyes para estimular la inmigración extranjera, que determinaron la llegada de más de 6 300 000 inmigrantes europeos en el periodo 1857-1930, de los cuales más de un millón desembarcaron en Buenos Aires antes de 1890,¹ con un incre-

mento de la población cercana al 56% (cuadro 1).

El movimiento migratorio provenía de una Europa política e ideológicamente turbulenta, y llegaba a una estructura social rural gobernada por el sistema de las relaciones clientelares y dominada por una oligarquía que era propietaria exclusiva de la tierra, con las características de una aristocracia rural que, como tal, basaba su poder político en la exclusividad de esta posesión. La consiguiente dificultad a la que se enfrentaban las masas inmigradas (en su mayoría de origen campesino) en su afán de acceder a la tierra, es la principal causa a mediano plazo de la concentración popular en las ciudades, sin igual en el pasado argentino. Este proceso asumió proporciones preocupantes durante los últimos años del siglo XIX, ya que se acompañó del descontento generado por las expectativas incumplidas. Entonces, en 1901 el Congreso, dominado en este periodo por la aristocracia rural, aprobó la ley 4031 de reforma militar, hecho que no parece casual si se toman en cuenta los aspectos formales de los cambios introducidos. La nueva ley sancionó la conscripción obligatoria de los ciudadanos varones y modificó desde la raíz las reglas de reclutamiento y promoción de los oficiales. Respecto de la conscripción para la incorporación permanente al ejército, la nueva ley exigió la ciudadanía argentina o la naturalización, y estableció la obligatoriedad del servicio militar para desempeñar un cargo en el sector público.²

¹ Davie, *World*, 1936, p. 449.

² Comando en Jefe del Ejército, *Reseña*, 1972, pp. 105-107.



La importancia de esta norma es evidente si se considera la dificultad para los inmigrantes de obtener la propiedad de la tierra, y no les dejó otra opción más que la carrera militar o el sector público. Así, la ley 4031 parece responder principalmente a motivos políticos y de integración social, y sólo de manera secundaria a exigencias militares. La función de integración de las masas inmigrantes es muy clara si se consideran las limitaciones a la obligación de la conscripción, introducidas cuatro años más tarde. Estas limitaciones establecieron, entre otras cosas, la reducción del servicio militar a tres meses, para los estudiantes, y se exoneró a todos los ciudadanos que pudieron demostrar experiencia en el uso de las armas; incluso bastaba simplemente pertenecer a una asociación de tiro. En otras palabras: se exentó a los que pertenecían a familias acomodadas, perfectamente integradas en la sociedad tradicional y para la cual no representaban una amenaza. Además, en el mismo año se habían introducido en los batallones y regimientos las escuelas de enseñanza primaria, que eran *obligatorias* y para todas las armas. Por un lado, el objetivo era ciertamente la reducción del porcentaje de analfabetismo, pero esta reducción estuvo sujeta a un proceso de reeducación de importancia fundamental para los fines de integración perseguidos por los promotores de la reforma. En este sentido, es significativo el porcentaje particularmente elevado de horas (33%) que se dedicó a la enseñanza de la historia y de la geografía argentinas.

El segundo aspecto de la reforma

militar, la profesionalización de los oficiales, fue una consecuencia del primero. Ésta se obtuvo con la obligatoriedad de la formación en el Colegio Militar para conseguir el grado de subteniente, que fue introducida con el fin de crear el personal militar adecuado a la vastedad de los objetivos atribuidos al ejército de conscriptos. Es importante destacar el hecho de que el abandono de la incorporación por decreto sustrae por primera vez las fuerzas armadas del control de la sociedad civil. Se produjo así un efecto inductido, probablemente inesperado por los promotores mismos de la reforma: el crecimiento progresivo de la cohesión de los oficiales, los cuales se identificaron finalmente en una nueva clase social con intereses autónomos y particulares. La pérdida por parte de la sociedad civil de lo que Huntington define como "control subjetivo" sobre el ejército,³ determinó –por primera vez– la adquisición por parte de las fuerzas armadas de una sustancial autonomía institucional, que creó de facto las condiciones necesarias para el refuerzo del poder político de los militares.

Entre 1901 y 1911 desembarcaron en Argentina más de 1 700 000 inmigrantes. Durante este periodo se extendió de manera creciente la convicción entre las clases dominantes de que el sistema liberal heredado desde el siglo XIX era un instrumento de control social inadecuado y que, además de la reforma militar, se necesitaba de un cambio más directo en la esfera política. La demostración más

³ Huntington, *Political*, 1969, p. 80.

clara de esta necesidad son una vez más los cambios estructurales en la sociedad argentina, que determinaron el incremento ulterior del desequilibrio en la distribución de la población en favor de las áreas urbanas, caracterizadas éstas por el crecimiento de una clase media heterogénea, vinculada al comercio exterior, y controlable con mayor dificultad por medio de las relaciones clientelares tradicionales y el fraude electoral. Además, se intensificó la demanda de participación política por parte de los sectores oligárquicos excluidos de la dirección del poder, después de las luchas interregionales del siglo XIX, y por parte de algunos nuevos terratenientes, enriquecidos con la actividad comercial.

Según Smith, la reforma electoral de 1912 "constituye una respuesta efectiva de corto plazo a una crisis de participación" en el proceso político.⁴ En efecto, en la crisis del sistema social tradicional, determinada por las proporciones del fenómeno de la inmigración y por el crecimiento de la población urbana, la oligarquía dominante comprendió que es indispensable evitar conflictos abiertos a nivel elitista. Entonces, este sector oligárquico buscó la solución de la crisis a través de la práctica tradicional del acuerdo⁵ elitista, lo cual habría de ampliar moderadamente la participación política, pero sin modificar el sistema social

existente. Este proyecto parecía posible ante la ausencia de una crisis de legitimidad del sistema mismo. En efecto, no obstante la heterogeneidad de la oposición, la cual se organizó desde 1892 en la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos dirigentes, por origen y condición social, tenían intereses mucho más asimilables a la aristocracia rural que a las clases medias (que constituyan su base electoral);⁶ éstas temían soluciones extremas para los problemas de orden público. El alto porcentaje de diputados radicales pertenecientes a las familias aristocráticas (63.9%)⁷ es un indicador importante del papel que el partido de oposición quiso desempeñar en la sociedad argentina.

La reforma electoral introducida en 1912 debe estimarse con base en estas premisas.⁸ Un análisis atento de las características de la ley, considerada en este contexto, revela claramente sus objetivos excluyentes y conservadores. La ley exige la ciudadanía argentina a los electores y la adopción del sistema denominado de la "lista incompleta".

El primero fue un factor crucial de

⁴ Hipólito Yrigoyen, elegido presidente de la república en 1916 y jefe de la UCR desde su fundación, es un estanciero acomodado de la provincia de Buenos Aires, y su familia materna es de antigua y "distinguida" ascendencia española.

⁵ Smith, *Argentina*, 1974, p. 30.

⁶ La propuesta de reforma es sostenida por el presidente liberal Roque Saénz Peña, luego de las crecientes peticiones de la oposición oligárquica. El acuerdo sustancial entre la oligarquía progresista y la mayor parte de las élites liberales sobre la nueva ley electoral es un indicador importante del fin conservador de los promotores de la reforma.

⁴ Linz y Stepan, *Breakdown*, 1978, p. 9.

⁵ Una especie de *gentlemen's agreement* entre las autoridades locales y los miembros del poder ejecutivo, lo que de facto excluye el debate público y por lo tanto la participación popular, y constituye la regla del juego fundamental del Estado liberal.

la reforma. En efecto, tomando en consideración la gran cantidad de inmigrados no naturalizados, la ley extendió el derecho de voto sólo al 40-45% de los varones adultos. Además, en tanto los inmigrados constituyan aproximadamente el 50% de la clase media emergente y el 60% de la clase trabajadora urbana, el sufragio resultó ampliado desde las clases dominantes tradicionales hasta un sector seleccionado de la clase media, que excluyó gran parte de la clase trabajadora *especialmente de la ciudades*.⁹ Se realiza así una selección cuantitativa y cualitativa, porque únicamente pudieron votar las clases medias "argentinas", mejor vinculadas a la estructura económica y política existente, y sobre todo menos condicionadas por las ideologías subversivas procedentes de Europa. Así, la oligarquía dominante tenía la convicción de poder lograr la posición mayoritaria, como demuestra la introducción en la ley del segundo factor, denominado de la "lista incompleta". Conforme a esta legislación, el partido ganador ocupaba los dos tercios de las curules disponibles, mientras el partido siguiente ocupaba el tercio remanente, determinando la exclusión virtual de los partidos de minoría. Así se introdujo una proporción inversa entre nivel de competencia y representatividad, reduciendo el porcentaje de los ciudadanos efectivamente representados por debajo del 30%. Además, los efectos de una eventual victoria de la UCR debían ser reducidos por la prioridad que, en la opinión de la oligarquía

tradicional, los radicales tendrían que atribuir a la práctica del acuerdo. En efecto, la nueva ley previó el desarrollo de las elecciones en dos niveles, y el sistema del sufragio universal directo únicamente para elegir a los grandes electores. De cualquier modo, la oligarquía dominante estaba convencida de poder controlar el proceso de integración de las clases emergentes por medio de una ampliación del sufragio poco más que simbólica.

La reforma electoral concluyó la fase de rearticulación del Estado liberal con el fin de adecuarlo a los cambios estructurales que se determinaron entre los dos siglos, sin modificar en sustancia las características de la sociedad tradicional. La secuencia temporal en la actuación de las dos reformas no puede ser considerada casual, no obstante que no existan sobre este asunto ni declaraciones ni documentos oficiales. Es importante señalar que la introducción del sufragio universal era reclamada en el estatuto orgánico de la UCR desde 1892, pero éste fue aprobado hasta veinte años después, mientras que el servicio militar obligatorio fue ratificado once años antes de la reforma electoral. El ciudadano argentino se hacía soldado antes que elector, y el ejército pudo así desarrollar aquella función formativa que se le atribuyó desde 1901.

Así, el Estado liberal notabiliar no fue modificado sustancialmente. El sistema político era todavía autoritario, y las reformas introducidas fueron formuladas únicamente para legitimar la continuidad del liderazgo liberal, excluyendo de facto a las masas populares de la esfera política.

⁹ Linz y Stepan, *Breakdown*, 1978, p. 10.

EL FRACASO DEL PROYECTO LIBERAL DE INTEGRACIÓN Y LA FORMULACIÓN DE UN NUEVO AUTORITARISMO

El golpe militar de 1930, reclamado por la oligarquía liberal y por la mayoría de las élites progresistas, fue consecuencia del fracaso de la reforma electoral y, en general, del proyecto liberal de integración social. Después de la introducción de la reforma de 1912 se preveía el crecimiento del liderazgo político de las clases dominantes y la integración de las clases populares en el sistema político excluyente tradicional. En realidad, durante la segunda mitad de la década de 1910 y primeros años de la siguiente se asiste a la recrudescencia de la protesta popular y a la disgregación de la sociedad argentina. En el interior de ella se desarticula (factor aún más grave) el pacto oligárquico y, en consecuencia, se determina la división crónica de las clases dominantes.

La sucesiva victoria electoral de la UCR y la actitud de apertura parcial hacia las masas del presidente radical Yrigoyen, con fines de poder personal, o por lo menos de facción, determinaron a fines de los años veinte la crisis de las reglas del juego político tradicional, factor imprescindible de legitimidad del sistema político para la oligarquía liberal. El desequilibrio de poder en favor de una facción minoritaria de la oligarquía progresista¹⁰ se

oponía a los principios del "acuerdo" tradicional. Este factor y la incapacidad de los sucesivos gobiernos radicales de reprimir la protesta popular dentro de los límites aceptables implicó, conforme a la lógica de las élites dominantes, la necesidad de recurrir a la acción violenta. Esta necesidad y la consiguiente intervención de las fuerzas armadas demuestran la inconsistencia del sistema electoral introducido por la ley de reforma y los objetos autoritarios de la misma.

La intervención del ejército en 1930 fue un importante factor de novedad: es el primer golpe en la historia argentina dirigido por los militares, y de hecho representó el comienzo del proceso de crecimiento del poder político de las fuerzas armadas. Este proceso fue posible por el aumento de la autonomía y del nivel de profesionalización de los oficiales, el que se incrementó después de la reforma militar de 1901. La aristocracia rural, a fines de los años veinte, particularizó en el ejército a la única fuerza independiente del poder político capaz de garantizar la conservación del orden social tradicional. Los militares no sólo detentaban el monopolio de la fuerza, sino que eran los depositarios de una nueva ideología, el nacionalismo. En éste, las clases dominantes reconocían la referencia en condiciones de contener el proceso de disgregación de la sociedad y reconstruir el "acuerdo" entre las élites

¹⁰ La facción radical de Yrigoyen conquistó la presidencia en 1916, durante las primeras elecciones después de la aprobación de la ley Sáenz Peña, y de nuevo en 1928, después del intervalo del radical moderado Alvear, más cercano al ambiente liberal. Probablemente sólo la elección

de Alvear a la presidencia para el periodo 1922-1928 ha permitido la continuación del sistema político introducido por la ley Sáenz Peña hasta el final de los años veinte, sin la intervención de los militares contra el poder legal.

argentinas. De ello emergió un elemento de novedad ulterior: las élites civiles necesitaban por primera vez de una ideología de la cual no eran los promotores. Como en el pasado, la oligarquía dominante fue el promotor del golpe, porque invocó la intervención coercitiva contra el poder legal; pero ahora solicita la intervención de una institución autónoma, ya no subordinada legalmente a la autoridad civil. La concepción liberal-notabilaria del Estado aún prevaleció, pero sólo porque ésta prevaleció entre los oficiales. Como consecuencia de esta continuidad, las élites civiles no pueden particularizar claramente los cambios en las relaciones de fuerza dentro de la esfera política, lo que emergerá con mayor claridad durante los años cuarenta. La persistencia del despliegue del ejército en defensa del orden social tradicional notabiliar representa el factor de continuidad. Entonces así, el fin único del golpe de Estado fue la eliminación coercitiva de los factores que impedían el funcionamiento de la forma estatal liberal y el logro de sus objetivos.

Los militares introdujeron el concepto de "tutela sobre la conducta correcta de las elecciones". En otras palabras, las fuerzas armadas se erigieron en garantes del respeto de las reglas del juego político tradicional, y determinaron la exclusión "legal" de las fuerzas políticas que no querían adecuarse.¹¹ Así, aceptando implícita-

mente la necesidad continua de intervenciones correctivas coercitivas, se evidencia el papel imprescindible del ejército para conservar el orden tradicional.

Las contradicciones derivadas de las exigencias de modernización exterior (inserción en el mercado internacional) y de tradicionalismo interior (perpetuación de la estructura social aristocrática), determinaron el fracaso de esta tentativa ulterior de integración, difundiendo la convicción, especialmente entre los militares, pero también entre las oligarquías, del agotamiento del sistema liberal derivado del siglo XIX y de la necesidad de articular una nueva y más adecuada forma de autoritarismo.

Durante los años treinta, en efecto, se verificó un fenómeno de migración interior consistente; este fenómeno determinó el incremento de la población en las áreas urbanas del litoral, ya no por la llegada de los inmigrantes europeos, sino como consecuencia de las migraciones desde las áreas rurales hacia las ciudades. Esta migración fue causada por la saturación de la demanda de fuerza de trabajo agrícola y por la persistencia de la concentración de la propiedad de la tierra. Consecuencia directa de este fenómeno es la progresiva reducción de la importancia porcentual de la población rural en favor de la población urbana, más difícil de controlar por medio de la

¹¹ En particular los radicales personalistas. Esta facción de la UCR constituye un nuevo partido después de la escisión de la mitad de los años veinte. Esta escisión es determinada por el contraste interno de la oligarquía progresista, entre los que quieren repartir el poder de

acuerdo con los liberales (UCR antipersonalista) y los que sostienen a Yrigoyen y quieren el refuerzo "legal" de su facción oligárquica, en contraste con los liberales y los principios del acuerdo tradicional (UCR personalista).

complicada red de relaciones clientelares, sostén principal del Estado liberal notabilíario. El número de asalariados del sector industrial aumentó de 410 000 a 730 000 en el periodo 1914-1941, y alcanzó los 800 000 en 1943. En el mismo año, Buenos Aires superó los 4 000 000 de habitantes, el 27% de la población argentina total. El 30% de ésta venía de las provincias rurales (sólo el 16% en 1936). Ahora, la tutela *exterior* de las fuerzas armadas no parecía suficiente para garantizar la conservación del orden social tradicional, porque necesitaba utilizar, demasiado frecuentemente, el recurso evidente de la violencia y del fraude electoral. Así, se asiste al aumento de la protesta de los sectores populares, más difíciles de controlar mediante los mecanismos tradicionales propios del sistema liberal de dominación social.

El 4 de junio de 1943 un nuevo golpe de Estado militar derribó el poder político legal. El factor de novedad fundamental fue la intervención militar contra un gobierno dirigido por los liberales. Los militares de 1943 no intervinieron a solicitud de las élites civiles como en 1930, sino por cuenta propia; el ejército obró con el objetivo de derribar el sistema político liberal, y no para defenderlo. El golpe se justificó por la incapacidad de las élites civiles de realizar un acuerdo capaz de garantizar el orden público y la estabilidad política. Entonces, el objetivo de los militares no fue revolucionario, sino que éstos buscaban articular un nuevo sistema de control de las masas que fuera capaz de conservar el orden social tradicional.

EL ESTADO NACIONALISTA Y SU VARIANTE NACIONAL-POPULISTA

Afirmar la voluntad de los militares de garantizar la supremacía de las clases dominantes tradicionales mediante la destitución violenta de las mismas de la dirección política, parece paradójico. Además, durante la fase nacional-populista, el gobierno militar dirigido por el general Perón, cuya presidencia fue sostenida por las fuerzas armadas, parecía guiar la movilización popular. En opinión de las interpretaciones más frecuentemente aceptadas, esta movilización, aunque reconocida como autoritaria, se describe como la superación del sistema político excluyente tradicional y el principio de una fase de modernización de la sociedad argentina mediante la constitución de organizaciones sindicales nacionales, antes inexistentes o marginales.

Para efectuar una evaluación correcta de la fase nacionalista, la que caracteriza el periodo 1943-1955, es indispensable particularizar con precisión los factores de continuidad y de cambio real que caracterizan esta fase histórica.

Como hemos visto, los militares intervienen por primera vez contra un gobierno controlado por las clases dominantes tradicionales y adquieren la dirección política directa. Esto incluso no significa que ellos procedieran contra la oligarquía liberal o, por lo menos, contra el orden social que esta oligarquía defendía. Los contrastes iniciales entre las clases dominantes y las élites militares parecen más forma-

les que sustanciales: los liberales estaban de manera obvia relucientes a un golpe que, de hecho, determinaba el fin de su liderazgo político secular en favor de la nueva clase militar emergente, pero al fin fueron constreñidos a aceptarlo como el mal menor. En efecto, las fuerzas armadas intervinieron en una situación social crítica que podía hacerse imposible de controlar en poco tiempo (por lo menos los militares, y genéricamente las clases dominantes, así vieron la situación).

La intervención militar podía frenar esta tendencia. Es importante señalar, entre 1936 y 1941 (antes del golpe nacionalista), el aumento constante de los miembros de las organizaciones sindicales, constituidas durante la primera fase del desarrollo industrial en los años treinta y la constitución de sindicatos nuevos y de importancia.¹² Estas organizaciones no podían ser controladas por los mecanismos clientelares del Estado liberal, y constituyan un factor amenazador también para la oligarquía progresista y, en gran parte, para las clases medias emergentes, las cuales no deseaban cambios radicales en la estructura social. Entonces los militares intervinieron en una situación de movilización popular ya existente, creciente y peligrosa, por lo menos potencialmente.

¹² Consecuencia de este incremento fue el crecimiento de la Confederación General del Trabajo (cgt) y la constitución de la Unión Obrera Metalúrgica en 1943, a iniciativa del trotskista Ángel Perelman. Esta nueva organización sindical alcanzó rápidamente los 300 000 asociados, y se convirtió en uno de los más importantes bastiones de la organización de los trabajadores.

Se observa una correlación interesante entre el proceso de articulación del nuevo Estado y la conducta de la movilización popular. En la primera fase peronista (1946-1950) los miembros de las organizaciones sindicales aumentaron de 877 000 en 1946 a 1 500 000 en 1948, y casi a 2 000 000 en 1950 (un aumento del 190% durante los primeros tres años).¹³ Durante el mismo periodo, el nivel de las huelgas fue menor que durante los primeros diez años del siglo, y el número de los huelguistas durante el periodo 1940-1944 fue el más bajo de la historia sindical argentina, y se incrementó en el periodo 1945-1949 sólo en 31% del nivel alcanzado durante los años 1910-1914, cuando la clase obrera era dos y media veces menor.¹⁴ Desde este punto de vista, la supuesta acción de movilización del peronismo parece en realidad una contramovilización o, por lo menos, contraria, que se efectuó con la intención de quitar consenso a organizaciones realmente revolucionarias, y más creíble de la abierta represión llevada a cabo durante la primera fase nacionalista (1943-1946).

Los primeros gobiernos nacionalistas y, sucesivamente, el peronismo, dan comienzo de manera más energética y sistemática al proyecto de desarrollo de la industria estatal, propuesto por los militares desde los años veinte. Este proyecto perseguía dos objetivos fundamentales: crear una fuente de crédito independiente de la renta del

¹³ Perelman, *Cómo*, 1961, pp. 133-134.

¹⁴ Germani, *Autoritarismo*, 1975, pp. 151-159.



Editor M.C. de Villegas.

Sesion del dia 20.
*Vinieron los sarracenos
Y nos matieron á palos,
Que Dios proteje á los malos
Cuando están lejos los buenos.*

latifundio, para hacer autónoma la acción del Estado (y, así, de los militares) de la influencia de la aristocracia rural, y producir al mismo tiempo los recursos necesarios para satisfacer las demandas de las clases populares en la esfera económica, limitando así sus pretensiones políticas. El buen éxito eventual de la industrialización tendría que producir, como efecto inducido importante, el refuerzo del poder político de los militares. Este proyecto parece más significativo si se considera que el "nuevo orden" no afectó a la sociedad rural, fortaleza de la oligarquía liberal. El *Estatuto del peón*, que por primera vez sancionó salarios mínimos, vacaciones pagadas y asistencia médica gratuita para el proletariado rural, no fue aplicado. El Estado nacionalista inició así un nuevo proceso de integración para defender el orden social tradicional, y articuló una nueva esfera económica separada, capaz teóricamente de amparar el latifundio de los efectos perniciosos de las ideologías subversivas que vienen de Europa y de los desequilibrios determinados por los procesos migratorios interiores y exteriores, necesarios para garantizar al sector rural el flujo adecuado para las exigencias de la demanda internacional.

LA CRISIS DEL NACIONALISMO Y LA ARTICULACIÓN DE NUEVAS FORMAS ESTATALES AUTORITARIAS

En 1955 un nuevo golpe de Estado militar desterró al general Perón y concluyó con el experimento nacionalista. ¿Cuál fue la causa de esta crisis?

Tanto el Estado liberal como el Estado nacionalista, según hemos visto, tenían como meta la conservación del orden social tradicional a través de la articulación de un sistema óptimo de dominación de las masas. La primera forma estatal consideró prioritaria la esfera política (capacidad de la oligarquía liberal de conservar el liderazgo por medio del ensanchamiento simbólico de la participación); la segunda fincó sus prioridades en la esfera económica (por medio del ensanchamiento de la participación económica se limitaron las pretensiones populares en la esfera política). Entonces, la función de ambas formas estatales es sustancialmente excluyente. La inclusión parcial de las masas, efectuada durante la fase nacional-populista, es particularmente importante por los cambios institucionales que tuvieron lugar, pero la movilización popular estaba todavía firmemente controlada por el gobierno y vinculada a la iniciativa del poder central.

La capacidad de controlar a las masas en el caso nacionalista, más que en el caso del Estado liberal, estuvo vinculada a la posibilidad de expansión económica, a medida que el Estado pudo satisfacer la "demanda de crédito" de las clases populares. El IAPI,¹⁵ agente estatal exclusivo en el comercio de productos agrícolas y de bienes importados, fue fundado durante la primera fase peronista con el fin de garantizar el flujo de réditos indispensables para satisfacer esta de-

¹⁵ Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.

manda y al mismo tiempo crear los recursos para desarrollar la industria estatal, que en el futuro próximo debería garantizar autónomamente este flujo.¹⁶ El punto débil de este proyecto fue el vínculo estrecho con un factor exterior y, por eso, imposible de controlar: la marcha de la demanda internacional de los productos primarios. El fracaso de esta demanda al principio de los años cincuenta dejó al Estado nacionalista sin los recursos para controlar eficazmente a las masas, objetivo con el cual los militares habían articulado esta forma estatal y las élites tradicionales la habían genéricamente sostenido (aún sin mucho entusiasmo).

Puesto que el nacionalismo termina su función y equivoca su objeto de largo plazo, las mismas clases sociales que determinaron su éxito causaron después su fracaso. El golpe de 1955 renovó la alianza entre los militares y las clases dominantes tradicionales, los cuales se pusieron de acuerdo genéricamente en los aspectos formales.

El golpe inauguró una fase que se caracterizó por la falta de una referencia sustitutiva del nacionalismo. La reiteración del sistema liberal fue consecuencia de esta falta. El periodo 1958 (año del retorno al sistema electoral)-1966 puede ser definido como una larga fase de transición, durante la cual el Estado liberal fue reactivado en ausencia de un sistema autorita-

¹⁶ El 12 de junio de 1947 el Congreso aprueba la ley 12978 para la constitución de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA); en 1951 se constituyó la Industria Aeronáutica del Estado (IAE), las cuales también absorbieron la producción de las máquinas agrícolas, decretada de interés nacional.

rio más adecuado. El modelo se derivó desde los años treinta, y por ello implicó la exclusión "legal" de las fuerzas políticas externas de las reglas tradicionales del juego (los radicales personalistas en los años treinta, los peronistas en los años cincuenta y sesenta). Pero los resultados fueron aún más esfimeros porque la "movilización conservadora" del periodo populista había introducido mecanismos institucionales nuevos (en particular una organización sindical nacional) que no podían ser desmantelados de la noche a la mañana. El problema de la coalición oligárquico-militar es la particularización del sistema para bloquear la movilización popular, puesto que esta movilización subordinada no podía realizarse por la falta de los recursos económicos indispensables para sostenerla.

Por lo tanto la introducción del sistema electoral en Argentina no se identifica, como en el pasado, con el inicio de una fase democrática. A pesar del retorno al gobierno civil, las fuerzas armadas continuaron de hecho gobernando desde el exterior, como demuestran la destitución violenta del presidente radical Frondizi en 1962 y la aplicación recurrente del principio de la *intervención*, según el cual las fuerzas armadas podían destituir de manera coercitiva aquellas administraciones locales cuya elección se considerara "incorrecta" o de cualquier modo contraria a los principios de seguridad y orden público. Además, los militares se impusieron progresivamente como canal extraparlamentario eficaz de las instancias sociales y del acceso a la presidencia. Frente a la

ineficiencia de las autoridades civiles, determinada en gran parte (pero no sólo) por las intervenciones periódicas de los militares contra la actuación de las decisiones votadas por el Congreso, el ejército aumenta ulteriormente su propio prestigio y su poder en la esfera política. Así, a mediados de los años sesenta, a las fuerzas armadas les fue posible presentar la solución militar autoritaria como la única opción creíble para las clases populares, cansadas por la ineficiencia crónica de las instituciones políticas del Estado liberal y por las élites tradicionales, ahora convencidas de la imposibilidad de eliminar por medio de los mecanismos del Estado liberal la oposición peronista, aún amenazante después de diez años de proscripción y de propaganda, y obstáculo principal a la recomposición del orden social según las reglas tradicionales. Tal convergencia de opiniones, aunque con presupuestos y objetos diametralmente opuestos, hizo posible el golpe de 1966 y la sucesiva articulación de un nuevo sistema de dominación social: el Estado BA.

¿Cuál es la nueva referencia alrededor de la cual se reúne el amplio sector de las clases sociales que representan el sostén para el nuevo golpe?

La función tutelar de las fuerzas en contra de la subversión interna se evidenció posteriormente durante los años cincuenta por la situación engendrada por la guerra fría. La amenaza comunista, verdadera o supuesta, suministró una nueva forma de legitimación a la intervención militar en los asuntos políticos. La intensifi-

cación cíclica de la protesta popular y de las huelgas, que en 1959 alcanzaron el número record de 1 411 062 trabajadores, con un total de 10 078 138 días de trabajo parado (cuadro 2), parece confirmar la tesis de la subversión interna, no sólo para las élites tradicionales, sino también para las clases medias mismas, siempre desconfiadas respecto a cambios radicales en el sistema social y político. A estos factores se añade el fortalecimiento del Partido Comunista Argentino en el mismo año y la crisis de Cuba en 1961.

La nueva referencia ideológica a la intervención militar directa deriva de la tentativa lograda por las fuerzas armadas para reforzar la unidad de clase de su institución. Los militares iniciaron un rápido proceso de "educación política" de los oficiales más jóvenes. El doble objetivo fue, por un lado, la exigencia de desarraigar definitivamente de las fuerzas armadas la doctrina nacional peronista (introducida durante la segunda fase del gobierno de Perón) y, por el otro, el deseo de limitar los efectos de disgregación de las "depuraciones" internas recientes. La tradicional adversidad de las fuerzas armadas hacia la política y el sistema de los partidos terminó así con la "politización" de las fuerzas armadas, reunidas bajo una ideología común, capaz de reforzar la unidad institucional. Con base en esta perspectiva se debe analizar la formulación de la Doctrina Militar de la Seguridad Nacional, la cual se impuso en Argentina a mediados de los años sesenta. Los principios que ésta expresa establecen que las fuerzas armadas no gobiernan ni

cogobiernan pero, al mismo tiempo, que su tarea consiste en garantizar la soberanía de la Constitución y prevenir cualquier acción totalitaria del gobierno y de la oposición. La conceptualización del totalitarismo fue también tarea exclusiva de los oficiales del ejército como categoría social ("super partes") que no estaba implicada en los intereses sectoriales, de los cuales los partidos, por el contrario, eran la expresión. La función tutelar de las fuerzas armadas debió considerar los cambios técnicos introducidos por la guerra ideológica en el período posbelicista, los que han trasladado las exigencias de la defensa nacional desde la frontera hasta el interior. No se trata a tal fin de *despoliticizar* al ejército, sino de *militarizar a la política*.

La doctrina de la seguridad nacional determinó el pasaje gradual desde la preponderancia de la ideología del nacionalismo industrial, a la preponderancia de la identificación de la industria como causa determinante de la proletarización de los trabajadores agrarios, y por tanto, vehículo de reforzamiento de la subversión. El período posperonista (durante la fase neoliberal y la primera fase BA) estaba todavía caracterizado por la tentativa de restablecer la opción industrialista, después de la eliminación de las presuntas causas de su primer fracaso; sin embargo se afirmó gradualmente el concepto expresado por la ecuación:

Desarrollo industrial = Proletarización = Comunismo,

y el término "comunismo" fue utilizado en sentido amplio para todas las fuerzas políticas contrarias al orden so-

cial tradicional, las que se presentaron como una amenaza para la "argentinidad". Este factor de disgregación constituyó la nueva referencia para las fuerzas favorables a la nueva intervención militar.

EL ESTADO BUROCRÁTICO-AUTORITARIO ARGENTINO

El análisis precedente ha subrayado la presencia de algunas variables de particular importancia que creo oportuno retomar brevemente:

a) La persistencia de una élite civil con características aristocráticas que, por un lado, conservó su propia posición privilegiada en el nivel económico y social pero, por el otro, no fue capaz de articular un sistema eficiente de control político de las clases subalternas; esta incapacidad fue en gran parte consecuencia de la dificultad para adaptar la estructura social notabiliar a las exigencias productivas del sistema capitalista y del mercado internacional para los productos agrícolas; la consecuencia política fue la necesidad de recurrir en repetidas ocasiones a la intervención militar, valorizando así la función política de las fuerzas armadas.

b) La consolidación de una clase militar autónoma, después de la reforma institucional de 1901 y la apertura de la carrera militar a los hijos de los inmigrados europeos; esta consolidación permitió a los oficiales sacar provecho del contraste entre las clases dominantes y de la irreconciliabilidad entre proyecto político y proyecto económico.

c) La constitución de una eficiente

organización sindical nacional que se desarrolló como consecuencia de la política social de los militares nacionalistas y hoy se presenta como un interlocutor fundamental, pero irreconciliable con la concepción aristocrática del Estado de las élites tradicionales.

El peronismo determinó además el aumento numérico consistente de la clase media, en parte por la extensión de los aparatos burocráticos, en parte por el desarrollo de la industria estatal. Persistió la ausencia de una burguesía nacional emprendedora. La clase burguesa, muchas veces particularizada en los estudios históricos y politológicos, parece derivar en realidad de la diversificación de las inversiones de los sectores más dinámicos de la oligarquía, los cuales participaron en los asuntos económicos internacionales aunque se mantuvieron subordinados al capital extranjero. Esta diversificación no eliminó la persistencia del latifundio ni la de los privilegios aristocráticos ligados a éste.

El AB partió de la necesidad de frenar la movilización de las masas urbanas, bloqueando la acción de los mecanismos institucionales creados por los mismos militares durante la fase nacionalista, o por lo menos integrando estos mecanismos en el nuevo Estado. La idea de una industria estatal con funciones de integración y de control social permanece todavía en la primera fase BA. Su posibilidad de funcionamiento se identifica en la remoción energética y coercitiva de los factores responsables de la inestabilidad de las fases nacionalista y neoliberal. En otras palabras, prevaleció la convicción de que el proyecto industria-

lista podía alcanzar sus objetivos sólo con la acción de un Estado autoritario, capaz de controlar todas las variables que influían, directa o indirectamente, en el funcionamiento de éste. Es decir que el ejército continuó sosteniendo el papel activo del Estado en la esfera económica, y entonces permaneció uno de los factores de desacuerdo entre las fuerzas armadas y la oligarquía liberal más ortodoxa. Por lo demás, este sector oligárquico vio en el Estado BA la única posibilidad para conservar su supremacía en las esferas social y económica, y sancionó así su propia renuncia al liderazgo político.

La primera fase BA también heredó del nacionalismo la voluntad de adquirir consenso social extenso, aunque sobre bases muy diferentes. El presidente Onganía persiguió la realización de un acuerdo nacional mediante un compromiso aparentemente equilibrado entre intereses contrapuestos. Así se explica la denección de los militares para efectuar el desmantelamiento inmediato del aparato sindical, el cual pudo ser un posible y precioso interlocutor (o más bien un colaborador) en la consecución de este fin. Pero, aceptando la dirección del proceso de desmantelamiento de las organizaciones populares contra la movilización comenzada veinte años antes por ellos mismos, los militares revelaron el fin real de su acción política: reforzar su poder sin modificar la estructura social tradicional, defendiéndola por medio de la articulación de un nuevo autoritarismo.

Aparece claro ahora que el Estado BA representa el perfeccionamiento de un sistema autoritario, y no la in-

terrupción violenta de una fase democrática. En este perfeccionamiento se pueden particularizar algunos factores de novedad: el desmantelamiento radical de las instituciones liberales y, sobre todo, la penetración directa del Estado en la estructura social. Esta penetración se realizó por medio de la constitución de un grupo de técnicos y burócratas, "especialistas en la coerción".¹⁷

El crecimiento progresivo de la alianza antipopular, actuado por el Estado BA, determinó el aumento del peso de la crisis económica sobre las clases medias y medias-bajas y, en consecuencia, el recrudecimiento de la protesta popular y la aparición de un factor nuevo: la guerrilla. La incapacidad del AB moderado de controlar eficazmente estos fenómenos, determinó su crisis y su fracaso sucesivo, después de otra intervención militar.

Así, el modelo histórico del siglo XX argentino parece, una vez más, repetirse en los años setenta:

- a) Articulación de un nuevo sistema político autoritario.
- b) Nueva forma de Estado.
- c) Ineficacia del nuevo sistema de dominación de las clases populares y crisis.
- d) Golpe de Estado.

Las fases de transición (el Estado neoliberal del periodo 1958-1966 y, después del primer AB, el Estado neoperonista del periodo 1973-1976), re-

¹⁷ Para ulteriores profundizaciones y diferentes interpretaciones del autoritarismo y los militares en Argentina después de 1955 y del Estado BA véanse Cavarozzi, *Autoritarismo*, 1987; Fatty, *Político*, 1971; Perina, *Onganía*, 1983, y O'Donnell, *Bureaucratie*, 1988.

presentan el momento de "articulación de un nuevo sistema político autoritario", aunque propusieron nuevamente formas estatales ya experimentadas sin éxito, en espera de poder formular un nuevo sistema, adecuado a la coyuntura socioeconómica (o por lo menos así considerado).

En 1976, después de la crisis del primer Estado BA y de la vuelta provisional al poder de los peronistas, emergió un factor nuevo: la convicción, compartida ya por las élites tradicionales o por los militares, de la imposibilidad de conservar el orden social tradicional y, al mismo tiempo, el apoyo popular. Esta convicción se acentuó a causa del clima de guerra civil que caracterizó el periodo 1973-1976, durante el cual el peronismo se reveló por primera vez incapaz de controlar la movilización popular, verificándose el recrudecimiento de la acción del terrorismo.¹⁸

La función exclusivamente represiva de la forma estatal que vino después del golpe de Estado de 1976 fue consecuencia de estos factores. Otra consecuencia fue la renuncia a la tentativa de integración de las clases populares en el orden tradicional, empezada mucho tiempo antes (en 1912) con la reforma electoral y nunca completamente abandonada. La renuncia también al proyecto industrialista por los militares evidencia la característica principalmente política de este proyecto. Esta renuncia determinó la realineación definitiva de las fuerzas armadas a la oligarquía liberal, determinando, por lo menos en la fase

¹⁸ Cavarozzi, *Autoritarismo*, 1987.

inicial, la renuncia a cualquier política de intervención estatal en la esfera económica. Este factor simplemente condujo a la no injerencia estatal en la sociedad rural, en particular a nivel fiscal, y determinó el progresivo deterioro de la deuda pública. En efecto, el Estado debió recurrir a los préstamos exteriores para poder pagar el costoso aparato burocrático, en parte heredado del pasado, en parte indispensable para la represión interna. La degeneración de esta situación y el brusco aumento de la inflación, la cual será pagada una y otra vez por los créditos medios y medios-bajos, determinó la enésima "crisis del sistema" del siglo XX argentino y el fracaso del último régimen militar en 1983.

La consecuencia fue el retiro (por lo menos provisionalmente) de la esfera política de la clase militar, comprometida en demasiados fracasos, la cual ya no pudo esconder sus responsabilidades (como en los años 1955 y 1973, cuando el fracaso de los sistemas políticos precedentes había sido atribuido a factores de responsabilidad extraños a la institución militar). Sea como fuere, este retiro dejó sin solución las contradicciones sociales responsables de las intervenciones militares. Es sancionada así la incompatibilidad entre el orden social tradicional y la estructura social, consecuencia de la evolución en el curso del siglo XX.

CONCLUSIÓN

En el análisis del siglo XX argentino he puesto particular atención en tres va-

riables: democracia, autoritarismo, militares. De ahí emerge la falta de la primera variable, reducida a un proceso electoral formal, con el fin de legitimar los privilegios de las élites tradicionales. Consecuencia de esta carencia fue la persistencia de un sistema político autoritario, el cual se manifestó en diferentes formas y estuvo estrechamente vinculado a la figura y a la función de las fuerzas armadas. Una característica fundamental del período analizado es la voluntad de los militares de favorecer la conservación del papel dominante de las élites tradicionales a nivel social y económico. También en el período peronista, cuando la acción del ejército parecía estar mayormente orientada hacia una dirección innovadora, esta acción llegó en último análisis a la defensa de la sociedad rural contra los impulsos de la modernización provenientes de las áreas urbanas.

¿Pero, por qué los oficiales continuaron defendiendo durante todo el siglo XX el orden tradicional? Es importante considerar la función de integración social que la reforma de 1901 asignó a las fuerzas armadas. Como hemos evidenciado, la profesionalización del ejército determinó, por un lado, el refuerzo imprevisto de la institución militar, la cual se transformó en una clase autónoma en condiciones de oponerse a las mismas élites tradicionales; y, por otro, la formación particular impartida a los oficiales y, sobre todo, la posibilidad real de carrera para los inmigrados, contribuyen de manera determinante a la neutralización del descontento popular, cau-

sado por la precedente falta de perspectivas de promoción social. La posibilidad de progresar socialmente mediante una institución que forma parte del Estado liberal, probablemente contribuyó a aumentar el sostén de los oficiales al orden social tradicional. Así, la carrera militar representó una posición conservadora: durante los primeros años del siglo XX las clases medias que escogieron esta carrera identificaban en la condición social de las clases dominantes un objetivo por alcanzar, y no una situación de privilegio para contrarrestar. En el curso del siglo XX, la caracterización sucesiva de la determinante principal del crecimiento del poder político de los militares en las contradicciones determinadas por la persistencia de una clase rural aristocrática, no hizo más que reforzar la posición conservadora de los oficiales argentinos. Su acción durante el periodo nacionalista contribuyó en parte a acrecentar estas contradicciones, obrando al mismo tiempo para la constitución de una sociedad urbana industrial moderna y para la conservación de una sociedad rural aristocrática. En efecto, el desarrollo de la industria estatal logró por un lado el control de la movilización popular, y por el otro contribuyó a profundizar las diferencias, ya existentes, entre las ciudades del litoral y las regiones rurales. La coexistencia de "dos Argentinas" inconciliables entre sí evidencia la importancia de la función política imprescindible de los militares, como "anillo" exterior capaz de contener la disgregación social.

Por tanto, los intereses de la sociedad rural se reforzaron con el tiempo, después de la alianza política con la

nueva clase militar surgida luego de la reforma de 1901. Esta situación de hecho no permitió cambios radicales en el orden socioeconómico, y obstruyó el paso a cualquier posibilidad de modernización real de la sociedad. La ampliación de la participación política mediante un proceso de democratización no pudo ser realizada porque era contraria a la situación de privilegio de la aristocracia rural, considerada como imprescindible por ella misma, detentadora del monopolio de la riqueza y de la fuerza, por medio del apoyo garantizado gracias a las fuerzas armadas.

El fracaso del último experimento autoritario determinó en 1983 el regreso al sistema electoral. La posibilidad de que este regreso pueda comenzar la primera fase democrática de la historia argentina dependerá principalmente de la intensidad de la percepción, sobre todo entre las élites tradicionales y los militares, de la imposibilidad de resolver las contradicciones históricas de la sociedad argentina con la simple reiteración de modelos autoritarios ya experimentados, aunque con las variantes que el momento específico parece requerir. En efecto, los experimentos del siglo XX parecen haber agotado las posibilidades de formas estatales originales. Además, parece imposible la reiteración de la solución represiva del último Estado BA, particularmente en presencia de una crisis económica desastrosa, la que no parece poder resolverse a corto plazo, y determina la escasez de los recursos indispensables para compensar la falta de participación política de las clases populares.

**Cuadro 1. Inmigración en Argentina
(1871-1914)**

<i>Años</i>	<i>Inmigración (en miles)</i>	<i>Años</i>	<i>Inmigración (en miles)</i>
1871-75	148 400	1896-00	412 000
1876-80	112 100	1901-05	466 000
1881-85	255 100	1906-10	1 238 000
1886-90	591 300	1911-14	466 000
1891-95	236 200		

Fuente: V. Vásquez Presedo, "The role of italian migration in the argentine economy, 1875-1914", *Economia Internazionale*, núms. 3-4, p. 614.

**Cuadro 2. Huelgas en la ciudad de
Buenos Aires en el periodo
1956-1967**

<i>Años</i>	<i>Número de huelgas</i>	<i>Número de obreros</i>	<i>Días parados</i>
1956	52	853 994	5 167 294
1957	56	304 209	3 390 509
1958	84	277 381	6 245 286
1959	45	1 411 062	10 078 138
1960	26	130 044	1 661 519
1961	43	236 462	1 755 170
1962	15	42 386	268 748
1963	20	207 216	812 395
1964	27	144 230	636 302
1965	32	203 596	590 511
1966	27	235 913	1 003 710
1967	6	547	2 702

Fuente: R. Rotondaro, *Realidad y cambio en el sindicalismo*, Pleamar, Buenos Aires, 1971, p. 2.

BIBLIOGRAFÍA

- Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1987.
- Comando en Jefe del Ejército, *Reseña histórica y orgánica del ejército argentino*, Círculo Militar, Buenos Aires, 1972.
- Davie, Maurice R., *World Immigration*, Macmillan, Nueva York, 1936.
- Fayt, Carlos S., *El político armado. Dinámica del proceso político argentino (1960-1971)*, Ediciones Pannedille, Buenos Aires, 1971.
- Germani, Gino, *Autoritarismo, fascismo e classi sociali*, il Mulino, Bologna, 1975.
- Huntington, Samuel P., *Political order in changing societies*, Yale University Press, New Haven, 1969.
- Linz, Juan J. y Alfred Stepan (a cura di), *The breakdown of democratic regimes: Latin America*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978.
- O'Donnell, Guillermo, *Bureaucratic authoritarianism, Argentina 1966-1973 in comparative perspective*, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1988.
- Perelman, A., *Cómo hicimos el 17 de octubre*, México, Buenos Aires, 1961.
- Perina, Rubén M., *Onganía, Lévingstone, Lanusse. Los militares en la política argentina*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982.
- Rotondaro, R., *Realidad y cambio en el sindicalismo*, Pleamar, Buenos Aires, 1971.
- Smith, Peter H., *Argentina and the failure of democracy: conflict among political elites, 1904-1955*, University of Wisconsin Press, Madison, 1974.
- Vásquez Presedo, V., "The role of Italian migration in the Argentine economy 1875-1914", *Economia Internazionale*, núms. 3-4, 1971.